

boletín de prensa

Editado  
por el  
Consejo  
Editorial de

**EL SIGLO**

EXTRA

ORGANO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

DOCUMENTOS  
NORTEAMERICANOS  
SOBRE CHILE

EXCLUSIVO

## MAS SOBRE LA INTERVENCION YANQUI EN CHILE

EL BOLETIN DE Prensa de EL SIGLO publica en forma exclusiva dos artículos aparecidos en la revista "Chile News", editada por el "Grupo de Trabajo por la Democracia", en Washington, Estados Unidos.

En ellos se entregan antecedentes sobre la intervención norteamericana en Chile, en apoyo al régimen fascista, y la complicidad de importantes líderes de la centro derecha en dichas actividades.

Estanzos ciertos que este material tiene un indudable interés para todos los demócratas chilenos.

"CHILE NEWS", mayo de 1987, Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile, Washington, EE.UU.

1

### EL PANORAMA DESDE WASHINGTON

(por Jeffrey G. Jackson)

(Este es un trabajo amplio sobre la política de EE.UU. con respecto al régimen de Pinochet. Incluye análisis sobre varios aspectos del asunto).

Durante el mes de abril, el Congreso dió importantes pasos al dar su aprobación inicial a las sanciones contra el régimen de Pinochet. A continuación se examina el transcurso de la acción parlamentaria a la luz de la política de la administración hacia Chile.

### Política inconsecuente de EE.UU. en apoyo al régimen

Durante el año pasado ha habido crecientes demandas del Congreso en el sentido de que la administración Reagan adopte medidas concretas para promover el retorno a la democracia y a los derechos humanos en Chile.

Estas demandas se intensificaron el verano pasado cuando un chileno residente en Washington, Rodrigo Rojas, fue quemado vivo y muerto por fuerzas de seguridad en Santiago. Esta tragedia atroz desató en el Congreso una controversia acerca de la política de EE.UU. la que a partir de 1981 ha sido básicamente de apoyo al régimen de Pinochet.

El apoyo norteamericano ha tomado la forma de la aprobación de créditos por valor de más de 2 mil 200 millones de dólares por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, desde 1981 a la fecha. Chile ha recibido además casi 300 millones de dólares anualmente en beneficios derivados del trato comercial preferencial y alrededor de 250 millones de dólares en garantías de inversión de EE.UU. Otro componente del apoyo norteamericano particularmente importante para el gobierno militar de Chile han sido los frecuentes contactos e intercambios de alto nivel entre el Pentágono y las FF.AA. chilenas. Esto incluye las maniobras navales conjuntas UNITAS, que se efectúan en septiembre, cada año.

¡NO MAS PINOCHET!

LA DEMOCRACIA SE CONQUISTA LUCHANDO!



2

Este apoyo ha sido acompañado por una política pública que oscila entre la condena y la aceptación tácita de la brutalidad del régimen de Pinochet y de su resistencia a las libertades políticas. Esta inconsecuencia tuvo su ilustración en noviembre cuando EE.UU. cambió, en la ONU, su posición, al tratarse en la Asamblea General una resolución que condenaba la violación de los derechos humanos en Chile. En esta instancia, EE.UU. votó en contra de una condena concebida en términos similares a los de la resolución que la propia delegación norteamericana había patrocinado 8 meses antes en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Muchos observadores experimentados atribuyen tales zig-zags a una contradicción en la política que se deriva del intento de reconciliar el apoyo básico a la dictadura con la necesidad de adoptar una posición diplomática en favor de una transición a la democracia y del respeto a los derechos humanos.

Este enfoque equivale a un síndrome que se perpetúa, de apoyo a la dictadura en Chile, puesto que Pinochet ha tenido éxito en cuanto a convencer a los estrategas políticos de EE.UU. de que la única alternativa a su gobierno es la toma del poder por la izquierda radical.

Ciertamente, esto es lo que ocurrió en septiembre pasado, cuando Pinochet explotó un intento de asesinato contra él y el descubrimiento de arsenales de la guerrilla, para levantar el espectro de la subversión comunista. A la luz de esos procesos, EE.UU. dió su aprobación a un importante crédito del Banco Mundial para el régimen, en noviembre, y cambió su posición en la votación de la resolución de la ONU.

La oposición democrática de Chile se ha mostrado desesperada por la política de EE.UU. hacia el régimen. Juan Luis González, Presidente del grupo opositor más importante y de mayor base en Chile, la Asamblea de la Civilidad, dijo la semana pasada que está perplejo por la política de EE.UU. No ve qué es lo que EE.UU. espera lograr con su llamamiento a una transición a la democracia mientras aprueba la ayuda económica al régimen, ayuda que él considera un factor crucial en la longevidad de Pinochet. "En Chile no puede haber una transición a la democracia mientras Pinochet se mantenga en el poder", dijo González.

#### El apoyo de EE.UU. y la ley vigente

Existen tres disposiciones legales vigentes que los parlamentarios desean que la administración aplique en su política hacia Chile. La mejor conocida de éstas es la Sección 701 de la Ley de Instituciones Financieras Internacionales de 1976, conocida popularmente como "la enmienda Markin" (por su autor original el senador Tom Markin, demócrata por Iowa). Esta ley instruye a los Directores Ejecutivos de EE.UU. en instituciones como el BID y el Banco Mundial para que voten en contra de los créditos (no destinados a objetivos humanitarios) que vayan a países donde se cometen violaciones de los derechos humanos.

A pesar de que el Departamento de Estado ha identificado al régimen de Chile como un grave violador de los derechos humanos, EE.UU. ha aprobado créditos por valor de más de 2 mil 200 millones de dólares a través del BID y del Banco Mundial para ese régimen, desde que se hizo cargo la administración Reagan.

La segunda disposición, aprobada en 1984 y conocida como "la enmienda Pease" (por su autor el representante Donald Pease, demócrata por Ohio), prohíbe conceder los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias a los gobiernos que violen las normas internacionales sobre los derechos de los trabajadores.

El Sistema Generalizado de Preferencias es un sistema que permite a los países en desarrollo exportar ciertos bienes a EE.UU. sin pago de derechos de internación, con el propósito de ayudar a las economías de esos países a obtener un acceso preferencial a los mercados norteamericanos. Frecuentemente, como es el caso de Chile, los



bienes que entran a EE.UU. de acuerdo con este sistema sólo son competitivos porque son producidos por trabajadores reprimidos y explotados. Se argumenta que SGP a menudo amenaza los empleos de los trabajadores norteamericanos junto con reforzar la represión sindical en el exterior.

En el caso de Chile, la evidencia de las violaciones de los derechos de los trabajadores es abrumadora. El código del trabajo de Pinochet, uno de los estatutos legales más repugnantes del mundo, de hecho legaliza la violación de los derechos de los trabajadores. Pese a ello, en enero pasado, la administración se negó a cumplir la ley con respecto al SGP y decretó que Chile puede continuar recibiendo los beneficios comerciales derivados de ese sistema. Chile exporta anualmente casi 300 millones de dólares en productos sujetos a estas normas.

La tercera disposición, también auspiciada por el representante Fease y basada en criterios relacionados con los derechos sindicales, prohíbe a la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC) otorgar garantías a las inversiones norteamericanas en países como Chile. Esta disposición está contenida en la Ley de Reautorización de OPIC de 1985. Chile ha sido uno de los mayores beneficiarios de OPIC, al recibir más de 250 millones de dólares en inversiones norteamericanas garantizadas por OPIC. A pesar de la ley, la administración determinó en enero pasado que Chile puede continuar recibiendo los beneficios de OPIC.

#### Creciente impaciencia del Congreso por la política oficial

La brutal muerte de Rodrigo Rojas el verano pasado desató mucha discusión en el Congreso sobre la política de EE.UU. hacia Chile. El debate se centró principalmente en la cuestión del apoyo de EE.UU. a los créditos para el régimen en el Banco Mundial y en el BID, que está en discordancia con las disposiciones sobre derechos humanos de la enmienda Markin ya descrita.

Nunca ha existido ninguna duda en el sentido de que el régimen de Pinochet exhibe una de las más horribles hojas de servicio del mundo en materia de derechos humanos. Entre 1981 y 1985, las fuerzas de seguridad de Chile fueron responsables de 301 muertes y 997 intentos de homicidio; las detenciones por motivos políticos llegaron a 65 mil 939 y las detenciones de manifestantes pacíficos, a 15 mil 142. Además, hubo 1.155 casos de relegaciones y más de 4 mil 500 casos de torturas y brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad. Estas cifras provienen de informes de la organización de derechos humanos de la Iglesia Católica y de la respetada Comisión Chilena de Derechos Humanos.

El Departamento de Estado hace fe en las mismas fuentes al elaborar su informe anual sobre derechos humanos, que ha señalado constantemente al gobierno chileno como violador de los derechos humanos. Varios miembros del Congreso han preguntado cómo es posible que la administración señale al gobierno chileno como grave violador de los derechos humanos y continúe, sin embargo, justificando la aprobación de créditos internacionales a ese régimen, en contra de la ley norteamericana. A medida que el tiempo pasa y el nivel de la ayuda proporcionada con apoyo de EE.UU. se eleva a miles de millones, crece en el Congreso la impaciencia con respecto a una política que, al parecer, ha hecho más para mantener a Pinochet en el poder que para promover una transición a la democracia en Chile.

Lo que resulta particularmente irritante para muchos parlamentarios es la indiferencia de la administración hacia el intento del Congreso de establecer pautas para la política exterior de EE.UU. Este enojo se ha visto exacerbado por las violaciones cometidas por la administración de las prohibiciones dictadas por el Congreso a la asistencia a los "contras" nicaraguenses.

El senador Edward Kennedy expresó este sentimiento creciente en marzo al decir: "La



ley vigente requiere que EE.UU. se oponga a los créditos a los que violan los derechos humanos, pero durante seis años la administración Reagan ha hablado de los dié debates para afuera contra el terrorismo y a favor de los derechos humanos y la democracia en Chile, mientras aprobaba créditos por valor de miles de millones de dólares ... para afirmar el régimen de Pinochet". Hay signos de que este sentimiento se está convirtiendo en un consenso organizado. En la última sesión del Congreso, más de 50 senadores y representantes firmaron cartas demandando que la administración entre a cumplir la ley de EE.UU. votando contra los créditos al régimen en el Banco Mundial y en el BID.

#### Nuevas iniciativas para sanciones en el Congreso

Al crecer la impaciencia por la falta de justificación de la administración en su actitud de no cumplir la ley, los senadores Kennedy y Harkin y los representantes Michael Barnes (demócrata) y Doug Bereuter (repblicano por Nevada) propusieron proyectos de ley destinados a forzar a la administración a no autorizar nuevos créditos al régimen.

Cuando resultó evidente que un importante subcomité de la Cámara estaba a punto de recomendar la aprobación del proyecto de Bereuter, el Secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos Elliot Abrams respondió a las críticas formuladas en una audiencia parlamentaria el 30 de julio de 1986 diciendo que EE.UU. votaría que "no" a los créditos pendientes en el Banco Mundial y el BID.

La declaración de Abrams, junto con los loables esfuerzos del embajador de EE.UU. Harry Barnes y el patrocinio norteamericano, en marzo, de la resolución de la ONU condenando las violaciones de los derechos humanos en Chile, parecían señalar un va elco bien acogido en la política de EE.UU. hacia la dictadura, y el Congreso entonces no actuó.

Retrospectivamente, el compromiso asumido por Abrams aparece, sin embargo, como una táctica destinada a paralizar la acción del Congreso y a silenciar a los críticos de la administración. Posteriormente, EE.UU. no votó en contra de un crédito crucial para el régimen (en noviembre), se dió vuelta en la votación de la ONU y estuvo de acuerdo en la imposición por Pinochet de un salvaje estado de sitio en septiembre, limitándose a una protesta suave. Y, en enero, de nuevo, la administración se negó a respetar la prohibición parlamentaria respecto de los beneficios de la garantía de OPIC y del SGP con respecto a Chile.

En el actual período de sesiones del Congreso existe una mayor determinación a imponer sanciones al régimen de Pinochet por medios legislativos. Esto es aún más fuerte a la luz de las revelaciones de febrero de que Pinochet personalmente orquestó el encubrimiento del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington en 1976 por agentes chilenos. La evidencia sugiere también que el propio Pinochet puede haber ordenado el asesinato. El senador Harkin declaró que "Pinochet es el Moammar Khaddafy de América Latina. Es no menos que Khaddafy un terrorista internacional, y ha llegado el momento en que debe ser tratado como un proscrito internacional, no menos que Khaddafy".

El 10 de marzo, los senadores Kennedy y Harkin en el Senado y los representantes Bruce Morrison (demócrata) y Edward Feighan (repblicano por Ohio) en la Cámara, presentaron un proyecto de legislación de sanciones titulado "Ley de Democracia en Chile 1987". Esta medida obligaría a la administración a aplicar las leyes existentes con respecto a los créditos internacionales y a los beneficios del SGP y la OPIC para Chile. Además, contiene otras disposiciones que prohíben las importaciones de cobre desde Chile y niegan los derechos de aterrizaje a LAN-CHILE y a otros aviones operados por el gobierno chileno.

Aunque la mayor parte de las fuentes del Congreso dan pocas posibilidades de pasar el proyecto Kennedy-Harkin, muchos legisladores están interesados en obtener la a -

probación de las disposiciones que exigen la aplicación de las normas legales existentes sobre créditos, SGP y OPIC. Estos legisladores incluyen las mayorías de las importantes comisiones de relaciones exteriores, tanto del Senado como de la Cámara.

#### Comisiones claves recomiendan sanciones

El vehículo para estas sanciones es la legislación de ayuda al extranjero que actualmente está en trámite en el Congreso. Durante el mes de abril, tanto la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara como la de Relaciones Exteriores del Senado aprobaron indicaciones que contienen sanciones a Chile.

En la Cámara, el Comité de Asuntos Extranjeros aprobó una enmienda propuesta por el representante Ted Weiss (demócrata por Nueva York) que ordena el corte de la garantía de OPIC a las inversiones en Chile. En el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la indicación del senador Christopher Dodd (demócrata por Connecticut) que elimina la aprobación de créditos internacionales así como los beneficios de OPIC. Estas medidas son los primeros pasos serios que el Congreso ha adoptado contra el régimen de Pinochet desde fines de los años 70.

En los medios del Congreso se esperan para dentro de poco votaciones sobre la ayuda al exterior en la Cámara o en el Senado. En general se estima que esas sanciones serán aprobadas.

#### Proyectos de sanciones pendientes

##### Ley Kennedy-Harkin

Elimina los beneficios respecto de comercio e inversiones y el apoyo de EE.UU. a los créditos en el Banco Mundial y en el BID; prohíbe las importaciones de cobre y suspende los derechos de aterrizaje para aviones chilenos.

##### Ley de Ayuda al Exterior (Senado)

Elimina los beneficios (garantías) de inversiones y el apoyo de EE.UU. en el Banco Mundial y el BID.

##### Ley de Ayuda al Exterior (Cámara)

Elimina los beneficios (garantías) de inversiones.



(2)

REAGAN FINANCIA POLÍTICOS DE CENTRO-DERECHA

(De la revista "Chile News", editada en Washington por el "Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile")

"Como parte de su política para estimular una transición conservadora en Chile, Washington ha desarrollado vínculos financieros y políticos con importantes líderes de la centro-derecha. Esto parece ser un intento de influir los procesos políticos de la lucha de Chile por la democracia.

Vínculos con políticos de centro-derecha financiados por Washington

Desde 1984, más de 1 millón 100 mil dólares en fondos de EE.UU. han sido empleados en Chile para subsidiar las actividades políticas de políticos de centro-derecha. Una fuente de estos fondos es la Fundación Nacional por la Democracia (FND), agencia con financiamiento federal que tiene un presupuesto anual de alrededor de 25 millones de dólares. El propósito de la FND es financiar grupos en EE.UU. y en el exterior con fines de organización y educación política anticomunista.

Con estos fondos, Washington ha logrado un cierto grado de control sobre dos importantes grupos en el proceso de transición y parece haber "captado" a sus dirigentes influyentes. El primer grupo es la Central Democrática de Trabajadores (CDT), la segunda federación sindical del país. El segundo, es la coalición de partidos de centro-derecha conocida como Acuerdo Nacional, controlada por el Partido Demócrata Cristiano.

Los líderes de estos dos grupos han surgido como elementos de apoyo claves para los objetivos de la política de EE.UU. en Chile: Eduardo Ríos, Presidente de la CDT y Sergio Molina, coordinador del Acuerdo Nacional.

Movimiento sindical conservador creado con fondos de Estados Unidos de N.A.

A comienzos de abril, un colaborador del representante Ted Weiss telefonó al Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile para averiguar quién era Eduardo Ríos. La semana anterior, Weiss había presentado una indicación al proyecto de ley de ayuda al exterior de la Cámara de Representantes, para imponer sanciones a Chile debido a las violaciones de los derechos de los trabajadores por el régimen de Pinochet. El colaborador informó que Eduardo Ríos había enviado un telegrama a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara. En este telegrama, Ríos sostenía que hablaba en nombre de los trabajadores chilenos y urgía a los miembros de la Comisión a oponerse a la indicación de Weiss, pese a lo cual, ésta fue aprobada posteriormente.

La representación de Ríos en el escenario político chileno es su calidad de Presidente de la importante y creciente confederación sindical de derecha, la Central Democrática de Trabajadores. Esta fue formada por un grupo de sindicatos fundamentalmente como un bloque anti-izquierdista. La CDT no existía hasta fines de 1984, en que la Fundación Nacional por la Democracia otorgó una subvención de 11 millones de dólares. Una parte considerable de esta suma está destinada a la actividad sindical en Chile, con el objeto de contrarrestar "la amenaza de rivales financiados por los comunistas" (cita del informe de la dirección de la FND). Ríos organizó la CDT con estos fondos.

Al año siguiente, la CDT recibió 450 mil dólares de la FND y el año pasado recibió 90 mil. En total, en los últimos dos años y medio Ríos ha recibido cerca de 1 millón de dólares de fondos de EE.UU. para sus actividades.

Con este dinero se pueden hacer en Chile cosas de muchas consecuencias. Debido a la vigencia del represivo código del trabajo del régimen, los sindicatos tienen prohibición de recolectar fondos a través de cuotas de sus miembros. De este modo, la CDT

ha estado en condiciones de utilizar estos fondos para rivalizar con el Comando Nacional de Trabajadores y otras organizaciones más genuinamente representativas de los trabajadores, sobre la base de ofrecer beneficios materiales directos a sindicatos cuya afiliación se busca, beneficios tales como fondos de huelga, y ha dispuesto además de medios para pagar los costos de grandes campañas de propaganda y reclutamiento.

Otras organizaciones sindicales no subsidiadas, como el CNT, simplemente no pueden competir con fondos de este volumen que, dada la situación de Chile, es enorme. Algunos dirigentes sindicales temen que Ríos logre separar sindicatos del CNT por este medio, lo que acarrearía una lucha de poder entre las principales centrales por el control del movimiento sindical.

Apararte de la cuestión de si la creación de una nueva fuerza sindical en Chile con financiamiento norteamericano es buena o mala para Chile, resulta claro que las credenciales de la CDT como organización sindical independiente para la defensa de los trabajadores son dudosas.

Igualmente sospechosas son las credenciales de Ríos como portavoz político. En reuniones organizadas por el Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile en noviembre pasado con los dirigentes máximos de las más importantes organizaciones sindicales (incluso una reunión organizada por la oficina del representante Pease), todos los presentes expresaron apoyo unánime a la sanción específica (término de la garantía OPIC por no respetarse los derechos sindicales) contenida en la indicación de Weiss.

#### Otros datos sobre Ríos

Los dirigentes sindicales mencionados estuvieron en Washington para participar en una serie de seminarios en el Instituto Meany, de la AFL-CIO. También concurreó Ríos. Los visitantes fueron alojados en los dormitorios del Instituto.

Ríos prefirió no quedarse con los otros sindicalistas y se alojó en el hotel Silver Spring (Fuente de Plata). Tuvo una serie de reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, a las que los otros dirigentes no fueron invitados.

En una conferencia de prensa después de una reunión en el Departamento de Estado con el Secretario Asistente Elliott Abrams, Ríos se negó a oponerse a un crédito pendiente para Chile en el Banco Mundial, aislándose así de la mayoría de los dirigentes sindicales y políticos de oposición que han demandado el término de los créditos del Banco Mundial al régimen. Esto colocó a Ríos totalmente en línea con la política de la administración Reagan.

Ríos no tiene capacidad para saber, en forma independiente, lo que ocurre a puerta cerrada en las negociaciones de las condiciones parlamentarias respecto de la legislación de ayuda al exterior, según señalan chilenos que conocen los recursos de la CDT. Cuando Ríos envió sus telegramas sobre la enmienda Weiss sólo un grupo reducido de personal del Congreso, sectores vinculados y funcionarios de la embajada de Chile sabían de la existencia de tal enmienda.

Parece claro que Ríos respondió al estímulo de la administración Reagan, que ha financiado su elevación al lugar prominente que ocupa, y que se opone a tal sanción al régimen de Pinochet.



### Coordinador del Acuerdo Nacional promueve la política de EE.UU. de N.A.

En octubre pasado, el Coordinador del Acuerdo Nacional de Chile, Sergio Molina, se embarcó en un extraordinario viaje a Europa. El objetivo de su misión era presionar a gobiernos claves para que apoyaran la petición del régimen de Pinochet de un crédito de 250 millones de dólares del Banco Mundial, que necesitaba en forma crítica. El viaje era tanto más notable cuanto que la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos que integran el Acuerdo Nacional se oponen firmemente a la concesión de tales créditos al régimen de Pinochet. Esto incluye al presidente del PDC Gabriel Valdés, a cuyo partido pertenece Molina.

El viaje de Molina estuvo precedido por una visita secreta a Washington. No se dispone de detalles sobre esa visita, que sólo se ha conocido recientemente.

Poco después del viaje de Molina, el subsecretario de Estado Asistente Robert Geibard viajó también a Europa para coordinar una estrategia política destinada a asegurar la aprobación del crédito en el Banco Mundial, donde EE.UU. tiene considerable influencia.

En aquel momento existía una presión creciente sobre la administración para que usara su influencia para rechazar las peticiones de créditos del régimen, debido a sus violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado dijo a un dirigente opositor chileno que se encontraba de visita en EE.UU. Juan Luis González, el verano pasado: "No tenemos interés en parar ese crédito".

Estados Unidos tuvo éxito al orquestar una serie de abstenciones en la votación final del crédito. Esto permitió a la administración satisfacer a medias a sus críticos, permitiendo que el crédito pasara.

### Molina financiado por la FND

Estas actividades de Molina en apoyo de los intereses de EE.UU. van en contra de la política de los partidos que él representa como coordinador del Acuerdo Nacional. Ellas han provocado desaliento y sospecha en varios de sus colegas de la oposición democrática. Molina ha coordinado también el apoyo financiero de la FND para ciertas actividades del Acuerdo Nacional.

En 1986, la FND destinó casi 150 mil dólares para importantes conferencias del Acuerdo Nacional en Caracas y Santiago. A Washington le gustaría influir en la creación política del Acuerdo Nacional, que representa el instrumento más viable de la oposición para presionar al régimen con vistas al retorno a la democracia. Como coordinador del Acuerdo Nacional, Molina así lo esperan los estrategas políticos de Estados Unidos- continuará a mantener esa orientación de acuerdo con los objetivos norteamericanos para la transición.

### Molina apoya petición de ayuda militar

El mes pasado el Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile fue contactado por un colaborador parlamentario quien informó que había recibido una carta confidencial escrita por Sergio Molina, en la que le expresaba apoyo a una petición de la administración de asistencia militar para las fuerzas armadas chilenas.

Esto fue confirmado independientemente por otra fuente, quien indicó que la carta fue usada por el embajador Barnes durante su reciente viaje a Washington para presionar en favor de la ayuda militar. Barnes tenía la esperanza de que el apoyo de Molina les diera la impresión, a parlamentarios claves, de que importantes sectores de la oposición democrática chilena estaban de acuerdo con la ayuda militar.

En este punto, no se sabe si Molina tenía la intención de que Harry Barnes usara su carta para solicitar formalmente el apoyo parlamentario para la ayuda militar al régimen. La noticia de esta carta probablemente va a causar controversia en Chile, entre los colegas de Molina en el Acuerdo Nacional.



## LA POLITICA DE EE.UU. EN CHILE ES AUTO-DESTRUCTIVA

La política y los sucesos examinados en los artículos precedentes reflejan el deseo de la administración Reagan de dar forma a fuerzas políticas que respondan a los intereses de EE.UU. a medida que la transición a la democracia se desarrolla en Chile. Se puede esperar que la creación de una federación sindical conservadora con fondos de la FND desempeñe una función útil para la movilización de un apoyo de masas para una fórmula de transición con el patrocinio de EE.UU. Las acciones de Sergio Molina sugieren que Washington considera que la co-optación de líderes opositores claves es un método útil para promover su estrategia política en Chile.

Creemos que la evidencia examinada en este número de "Chile News" nos permite elaborar conclusiones probables sobre el objetivo básico de la política de EE.UU. en Chile. Ella consiste en apoyar al régimen materialmente, junto con auspiciar esfuerzos para aislar a Pinochet de elementos claves de las Fuerzas Armadas que pudiesen apoyar la transición a un gobierno civil conservador. EE.UU. espera fortalecer las fuerzas de centró-derecha en el seno de la oposición civil y obtener cierto grado de control sobre actores claves de estas fuerzas.

Washington espera que este enfoque conducirá a la exclusión de los sectores opositores izquierdistas de la transición. Esto abriría mejores perspectivas para un acuerdo para el retorno a la democracia que fuera aceptable para las fuerzas armadas.

La posición del Grupo de Trabajo por la Democracia en Chile es que esta política puede ser auto-destructiva y que su efecto será fortalecer políticamente a Pinochet. Aunque los intentos de Washington de estimular a los elementos "democráticos" de las fuerzas armadas son bien inspirados, el enfoque de EE.UU. hacia la oposición democrática chilena no es realista.

Cualquier intento de excluir a la izquierda no violenta del proceso de transición tendrá el efecto de radicalizar aún más el escenario político chileno. Si la extrema izquierda es excluida de participación a través de los canales políticos normales, como las elecciones libres y el diálogo, esto estimulará el crecimiento de la ilegalidad y la violencia.

Pinochet ha usado el espectro de la violencia comunista para consolidar su apoyo en las FF.AA. en el pasado y no hay que darle una nueva oportunidad de hacerlo. Ello sólo mellaría los intentos de EE.UU. de aislar a Pinochet de su apoyo militar.

Además, la intervención norteamericana en el proceso político chileno, sea subsidiando a un movimiento sindical o por intermedio de importantes líderes como Sergio Molina, tendrá el efecto de dividir aún más a la ya decaída oposición democrática. Las actividades de Eduardo Ríos y Molina ya han causado disensión y pueden conducir a mayor división dentro de la oposición. Las consecuencias de estos intentos de EE.UU. de obtener algún control sobre la política chilena puede conducir a hacerla más incontrolable. Esta es una buena noticia para el general Pinochet.

Creemos que la política de EE.UU. se derrotará a sí misma porque no toma en cuenta las realidades políticas de Chile. Nosotros abogamos por una política de EE.UU. que ponga término a todo apoyo al régimen y que incluya la imposición de sanciones. Abogamos por una política que se base firmemente en los derechos humanos, en la plena participación en el diálogo en un marco para elecciones libres, y una transición inmediata a la democracia. Esto reforzaría a la oposición, reprimida y dividida, en sus esfuerzos por desarrollar un enfoque unificado para confrontar a las fuerzas armadas con sus demandas de democracia y respeto por los derechos humanos."